



VEN

CUBA
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE

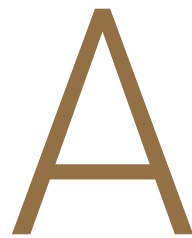
¡INFORMA LA RADIO RELOJ...!



La cara oscura de la revolución

Marifeli Pérez-Stable

VICEPRESIDENTA DE DIÁLOGO INTERAMERICANO
(WASHINGTON DC) Y CATEDRÁTICA EN SOCIOLOGÍA EN LA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA FLORIDA (MIAMI)



A PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI, EL carácter dictatorial del Gobierno cubano está ampliamente reconocido. En 1991, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó a La Habana por sus prácticas represivas contra la oposición pacífica. En marzo y abril de 2003 ocurrieron los incidentes más notorios de los últimos años: unos 75 opositores fueron condenados a largas sentencias y tres ciudadanos fueron ejecutados por haber secuestrado una embarcación con la intención de emigrar a Estados Unidos. El caso del poeta Heberto Padilla en 1971, los mítines de repudio contra los que se iban por el puerto del Mariel en 1980 y los fusilamientos en 1989 del general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia y otros dos oficiales constituyen hitos en el oscuro proceso a partir del triunfo revolucionario de 1959. Así y todo, las violaciones a los derechos humanos durante la década de los años 60 –las más graves hasta la fecha– no tienen el mismo grado de reconocimiento e, incluso, son en gran parte desconocidas. No es de extrañar. La revolución fue parte vital de los movimientos de la nueva izquierda que cifraron en la alternativa cubana sus esperanzas de un mundo más justo. Pero hay otras razones.

La democracia por entonces estaba relegada mayormente al mundo desarrollado occidental y, aun allí, sobrevivían dictaduras en España, Portugal y Grecia. En el Tercer Mundo, las dictaduras de derecha consumaban represiones horribles en aras de combatir el comunismo, casi siempre con el apoyo abierto o tácito de Estados Unidos. El perfil de la comunidad internacional pro derechos humanos también pesó, ya que, hasta fines de los 80, sus activistas

Castristas y anticastristas han justificado sus actuaciones –violaciones de los derechos humanos y delitos violentos– en base a una lógica con fines absolutos partidarios

tendían a ser individuos de izquierda y centroizquierda. En el caso de Estados Unidos en particular, el cabildeo en favor de los derechos humanos surgió en oposición y denuncia a las políticas que subvertían a gobiernos democráticos y apoyaban a regímenes militares en América Latina; por la hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba, no se le dio énfasis a la situación en la isla. Por último, los exiliados cubanos no eran aliados naturales de los defensores de los derechos humanos: el exilio se alistaba con Estados Unidos en la guerra fría, mayormente compartía la ideología anticomunista de los regímenes de derecha y, por subsiguiente, una gran parte de los exiliados pasó por alto las violaciones que éstos cometían.

Una doble moral permeaba la cuestión de los derechos en relación con Cuba: sectores importantes del movimiento internacional no le daba a las víctimas cubanas la misma consideración que a las de las dictaduras de derecha y las de la Unión Soviética y Europa del Este; el exilio, por su parte, no denunciaba a las dictaduras de derecha ni reconocían a sus víctimas.

La situación de los derechos humanos en Cuba ha sido parcialmente revertida por una combinación de factores: el carácter absolutista del Gobierno cubano, la expansión de una sociedad civil independiente en la isla y el consenso internacional sobre la democracia y los derechos humanos. Aun así, el foco principal de atención de la comunidad internacional sobre la isla es el estado actual de los derechos humanos. La cuestión, sin embargo, tiene otra dimensión: la del costo humano requerido por la revolución, en particular pero no exclusivamente durante los años 60, y también por la oposición cubana al régimen y la del Gobierno de Estados Unidos. Esa década fue la del conflicto armado –de cierta manera, una guerra civil– y de la coexistencia trágica de ilusiones extraordinarias y abusos

monstruosos. La polarización surgida de ese enfrentamiento –aunque ahora se dirime mayormente por medios pacíficos– sigue marcando el ritmo de la política cubana.

Para fines de 1960, Cuba ya no disponía de instituciones capaces de solventar pacíficamente las discrepancias políticas. No obstante, el Gobierno retenía un gran apoyo popular. La defensa de la soberanía nacional ante Estados Unidos y lo que se entendió por justicia social dio al traste con la democracia sin que la mayoría revolucionaria de aquel momento soportara las consecuencias. A lo largo de 1959 y 1960, la gran mayoría de los que se opusieron al Gobierno respaldaba una amplia transformación socioeconómica y un nacionalismo moderado. Si bien es cierto que la reforma agraria y luego las nacionalizaciones desligaron a la clase alta e importantes sectores de la clase media, tan o más importante en el surgimiento de la oposición a la revolución fue la forma autocrática en que las altas instancias ejercieron el poder. El Gobierno configuró una lógica de fines absolutos partidarios que rápidamente fundió al país con la revolución y a la revolución con su máximo líder. Ante ese emplazamiento, la oposición se acogió al recurso de la rebelión.

ENTRE 1960 Y 1966, MILES DE CUBANOS –entre ellos, campesinos y otros ciudadanos de orígenes humildes y revolucionarios– se alzaron en armas. Por una parte, la oposición respondió acorde con una cultura política que casi siempre había valorado las armas por encima de la lucha cívica cuando se trataba de una dictadura. Por otra, el Gobierno fue rápidamente refrenando la actividad política autónoma de manera tal que el recurso a las armas por la oposición sucediera casi inevitablemente. Aunque la cordillera del Escambray fue el corazón de la resistencia, hubo unos 179 grupos de alzados a lo largo de la isla; el argot oficial los denominó “bandidos”. El conflicto cobró un mínimo de 3.000 vidas de ambos lados. Al Gobierno se enfrentó a un número mayor de rebeldes del que

había combatido al dictador Fulgencio Batista a finales de los años 50. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias movilizaron unos 100.000 milicianos para contender a los alzados, que quizás sumaran 8.000 en su momento tope en 1961. El “ejército” rebelde nunca contó con más de 2.000 alistados, mientras que el Movimiento 26 de Julio urbano enroló a unos 5.000; en la ofensiva del verano de 1958 –la única operación militar seria que el ejército de Batista montó contra la guerrilla– participaron 12.000 soldados. En los años 50, unas 2.000 personas perdieron la vida a causa de la violencia política.

De hecho, es útil deslindar los patrones de la represión en Cuba en dos etapas: la década de 1960 y a partir de los 70. Fue durante los 60 que se cometieron las peores violaciones habidas y conocidas hasta la fecha y son las que más luz necesitan. Nunca como entonces fue mayor el apoyo al Gobierno revolucionario ni tampoco –hasta el momento– mayor la amenaza que la oposición en la isla le representó; la violencia fue el signo de los tiempos. A medida que la resistencia interna armada se apagaba, el Gobierno fue retrayendo la represión intensa y refinando medios más sutiles. El perfil fundamental de la represión ha sido la aplicación de una legalidad extraordinariamente restrictiva de los derechos fundamentales y las libertades individuales y de una vasta red institucional de control político. Si en los años 60 la respuesta del Gobierno a la resistencia interna fue la violencia, la prisión y el pelotón de fusilamiento, a partir de los 70 la represión se fue dando más habitual, pero no exclusivamente, en torno a la intimidación, el hostigamiento, la arbitrariedad y el encarcelamiento. El carácter no violento y la expansión de la oposición en la isla –“el poder de los sin poder”, al decir de Václav Havel– ha ido desvistiendo al régimen.

LAS PARTES EN EL CONFLICTO CUBANO han justificado su actuación en base a una lógica de fines absolutos partidarios. Una ética de medios, sin embargo, debe ser la piedra inamovible de la co-

La polarización derivada del enfrentamiento armado registrado entre 1960 y 1966 sigue marcando el ritmo de la política, aunque hoy se dirime por medios preferentemente pacíficos

existencia cívica, es decir, el respeto a los derechos humanos. Cuando en Cuba existan las condiciones, el esclarecimiento del pasado –si así lo determinan los cubanos que allá vivan– deberá enmarcarse dentro de los parámetros sentados por la Carta Internacional de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las convenciones de Ginebra y los acuerdos contra el terrorismo patrocinados por la ONU, entre otros. Apuntando al norte de una Cuba democrática y con miras a una búsqueda plural de la verdad, las siguientes cuestiones son un esbozo de algunos de los hechos que deben ser considerados.

Violaciones del Gobierno cubano

- **LA AMPLIACIÓN Y LA APLICACIÓN** de la pena de muerte después de 1959 a actos cometidos por razones políticas. ¿Cuántas personas fueron fusiladas?
- **LA IMPLANTACIÓN DE CONDENAS** –pelotón de fusilamiento o larguísima penas de cárcel– mediante juicios que no se atuvieron a los estándares internacionalmente establecidos de debido proceso.
- **DETERMINAR EL NÚMERO DE PRESOS** políticos. ¿Cuántos fueron condenados por actos de violencia política? ¿Cuántos fueron presos de conciencia?
- **MALTRATOS A LOS PRESOS POLÍTICOS.** Torturas –físicas y psicológicas– y muertes extrajudiciales a partir de 1959 hasta el presente. Esclarecer la situación del presidio Modelo –6.000 reclusos–, minado en 1962 para volarlo de producirse una invasión estadounidense.
- **IDENTIFICAR EL PARADERO DE TODOS** los muertos por razones políticas y devolver sus restos a los familiares. Informar fidedignamente a éstos cómo fallecieron sus seres queridos.
- **EL USO Y ABUSO DEL ARRESTO** preventivo por razones políticas. En vísperas de la invasión de bahía de Cochinos, el Gobierno detuvo a decenas de miles de personas.
- **EL TRATO DADO A LOS PRISIONEROS** de guerra: a los miembros de la Brigada 2506 cuando la invasión de bahía de

Cochinos en 1961 y a los alzados en el Escambray y otras zonas en los años 60. Torturas y muertes extrajudiciales.

- **LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS** humanos de la población civil atrapada por los conflictos bélicos, especialmente la relocalización forzada de campesinos del Escambray en comunidades lejanas creadas para recibirlos. ¿Cuál fue el total de personas relocalizadas? ¿Cuántos pueblos se crearon? ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Dónde estaban?
- **EL TRABAJO FORZADO POR RAZONES** de conducta considerada impropia por el Estado tales como disidencia política, creencias religiosas, preferencia sexual o predisposición a la delincuencia, por ejemplo, en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) y a las personas que solicitaban la salida del país. ¿Cuántas personas fueron internadas en las UMAP?

En cuanto a algunas de estas situaciones, ha habido cierto reconocimiento por parte del Gobierno cubano. La salida de Ramiro Valdés como ministro del Interior en 1968 puede atribuirse, en parte, a la situación del presidio político. Su sucesor en el cargo, Sergio del Valle, implementó un llamado plan progresivo que gradualmente y mediante un programa de trabajo en la construcción, la agricultura y otros sectores civiles puso en libertad a muchos antes de que cumplieran sus sentencias; su mera implementación implícitamente reconocía la insostenibilidad del presidio político bajo las condiciones anteriores. Al mismo tiempo, el plan progresivo no resolvió la situación de los presos plantados que rehusaron acogerse al mismo por razones de conciencia y fueron tratados con particular dureza por las autoridades. Respecto a la población campesina, Carlos Rafael Rodríguez –entonces miembro de la alta dirigencia– admitió que la política del Gobierno revolucionario no siempre fue “correctamente aplicada”, que “se cometieron errores serios en las relaciones con el campesinado” y que “no se respetó la legalidad revolucionaria”. Sobre las UMAP, un artículo del periódico “Granma”

anotó que “algunos oficiales perdieron los estribos y fueron sometidos a consejo de guerra”. Durante una conferencia celebrada en Cuba en el 40 aniversario de la invasión de playa Girón en 2001, un funcionario del Gobierno reconoció que había sido un “error” transportar a La Habana desde bahía de Cochinos a decenas de prisioneros de guerra en una rastra sin ventilación; nueve hombres murieron asfixiados en el trayecto de varias horas.

Si bien oportunas, estas lecturas son simples granitos de arena en lo que debería ser un amplio mar de transparencias para que ni éste ni ningún otro Gobierno en Cuba jamás vuelva a incidir en tales comportamientos.

Abusos y delitos por la oposición violenta

- **LOS CASOS DE VICTIMIZACIÓN** de la población y las agresiones a instalaciones civiles por la resistencia interna en las ciudades, en las montañas y desde el exilio en la ejecución de sus acciones contra el Gobierno. Esclarecer los casos de alfabetizadores y campesinos asesinados por los alzados durante la contienda en el Escambray y de las muertes de civiles producidas por los ataques esporádicos a las costas cubanas.
- **EL TRATO DADO A LOS PRISIONEROS** de guerra tomados por los alzados en el Escambray y otras zonas de Cuba.
- **ATENTADOS CONTRA SEDES** diplomáticas y oficinas comerciales cubanas en el exterior, como la Misión de Cuba ante la ONU y oficinas de Cubana de Aviación en varios países.
- **ATAQUES A NAVES PESQUERAS CUBANAS** o de la marina mercante en alta mar.
- **VOLADURA DEL VUELO DE CUBANA** de Aviación proveniente de Barbados en 1976 que costó la vida a 73 personas.
- **ASESINATO O SECUESTRO** de diplomáticos cubanos en Portugal, Argentina, México y Estados Unidos.
- **ATENTADOS EN MIAMI** contra agencias de viajes y otros comercios vinculados a Cuba a fines de los 70 y 80, contra los negocios o casas particulares de personas que sostenían una posición de apertura hacia el Gobierno cubano y contra

individuos que manifestaban su oposición a la línea apoyada por el exilio tradicional.

• **ASESINATO DE PERSONAS EN MIAMI**, Nueva Jersey y Puerto Rico que favorecían el diálogo y una nueva política hacia Cuba.

MUCHAS DE LAS ACCIONES Opositoras de los 60, aunque Estados Unidos estuviera involucrado en las mismas –de diferentes formas y en distintos grados–, fueron de ejecutoria y responsabilidad cubanas. Una de las cuestiones centrales es deslindar los daños humanos ocasionados por acciones cubanas a razón del enfrentamiento armado y aquellos que fueron producto de la iniciativa de Estados Unidos, aunque en muchos casos se tratara de acciones compartidas. El Gobierno revolucionario tuvo una genuina y autóctona oposición cubana y sus acciones, incluso sus posibles abusos y atrocidades, deben ser establecidos como tales. A la luz del derecho internacional, la violencia perpetrada contra objetivos del Gobierno cubano en el exterior y contra cubanos en el exilio que favorecían otra política hacia la isla no puede más que considerarse terrorismo.

En relación a las violaciones cometidas en Cuba durante el conflicto de los 60, los responsables probablemente ya hayan pagado por éstas, bien porque fueron fusilados o porque cumplieron largos años de presidio. En algunos casos de violencia en el exilio, se han realizado juicios y emitido condenas. Al mismo tiempo, es importante destacar la transformación en proceso del exilio: la lucha cívica y no violenta es hoy su signo principal. Así y todo, no es posible minusvalorar los efectos perjudiciales que la violencia consumada en el exilio ha tenido sobre la libertad de expresión en Miami; tampoco es posible sostener que hoy esa comunidad sea la misma de hace 20 años. A partir de mediados de los 90 se ha avanzado en favor de una comunidad más pluralista e incluyente, si bien aún queda camino por andar hacia una plena conciencia cívica que valore una cultura de diálogo y de medios.

Gobierno de Estados Unidos

Mediante la llamada Operación Mangosta, la Agencia Central de Inteligencia montó una extensísima red de acciones encubiertas contra objetivos estratégicos –militares y civiles– con el fin de subvertir al Gobierno cubano que, sin duda, merece el calificativo de terrorismo de Estado. No pocos de los actos más graves de sabotaje contra instalaciones civiles en Cuba fueron iniciados y financiados por el Gobierno de Estados

Unidos, si bien en la mayoría de los casos ejecutados por opositores cubanos. La Administración estadounidense ya reconoció una importante serie de hechos graves como el involucramiento de la CIA en la planificación de atentados contra la vida de Fidel Castro. En 1975, bajo la dirección del senador demócrata Frank Church, el comité del Senado de Estados Unidos para asuntos de inteligencia condujo unas audiencias extensísimas sobre la posible participación de la CIA en complots para asesinar a líderes de otros países. La evidencia presentada corrobora que hubo al menos ocho planes concretos para eliminar al líder cubano entre 1960 y 1965, si bien algunos de ellos nunca avanzaron más allá de una etapa inicial de planificación.

Una vez emprendida la transición, Washington debería colaborar plenamente con las autoridades y la sociedad civil cubanas para esclarecer lo más plenamente posible todas las cuestiones relacionadas con la política exterior estadounidense hacia el Gobierno cubano a partir de 1959, en especial aquellas que hayan ocasionado daños humanos. Así lo hicieron las administraciones de George H. W. Bush y William J. Clinton, respectivamente, en los casos de El Salvador y Guatemala. Una Cuba democrática merecería que se le prestara la misma consideración en aras de la mayor transparencia posible en sus futuras relaciones con Estados Unidos.

LA SALUD DETERIORADA DE FIDEL CASTRO apunta hacia el final de una era en Cuba. De poco valen las afirmaciones categóricas sobre una sucesión permanente o una transición a la democracia de la noche a la mañana. Lo único indiscutible es que Cuba, afortunadamente, será otra sin el comandante. Sólo la muerte es permanente y pocas cosas trasnochadas salen bien. Habrá sucesión y, más adelante, transición. El tema de este artículo subraya hechos álgidos que nos ayudan a entender la intensidad con que los bandos aún sostienen sus posiciones. Mi opción es por rescatar memorias y establecer verdades. Lo de impartir justicia es extraordinariamente escabroso y, en todo caso, le competirá a los cubanos de la isla decidirlo en su momento. Mientras tanto, celebro que la doble moral que afligió a la comunidad internacional respecto a los derechos humanos en Cuba se haya despejado. Queda pendiente, sin embargo, la década del 60, cuando la revolución brilló como nunca y cuando la oposición –tan cubana como las palmas– ofrendó vidas y larguísimos años de cárcel en aras de la libertad y la democracia.

A pesar de los progresos en la comunidad exiliada a favor de una sociedad más pluralista, abierta e incluyente, aún queda camino por recorrer hasta alcanzar una conciencia que valore la cultura del diálogo